



ALEGACIONES DE UGT AL BORRADOR DE CARTA DE DERECHOS DIGITALES

INTRODUCCIÓN

La Carta de Derechos Digitales es un documento de gran importancia para la ciudadanía, en general, pero también de forma específica en su entorno propio, la empresa, para la persona trabajadora. La concepción de texto como una mera enumeración genérica de derechos sin ninguna traslación práctica, más allá de lo ya expuesto en los artículos 87 a 91 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, carece de sentido. Es imprescindible profundizar en los derechos individuales y colectivos que esta nueva sociedad tecnológica requiere para proteger de forma efectiva y real a trabajadoras y trabajadores ante conductas inapropiadas, impulsando al mismo tiempo los cambios necesarios que permitan que nadie se quede atrás en un momento trascendental de transformación del mercado de trabajo. Ese es el sentido, y no otro, en el que se dirigen los Comentarios realizados al texto propuesto por el Gobierno.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

El objeto de este documento es compartir el posicionamiento de la Unión General de Trabajadores sobre el borrador de la Carta de Derechos Digitales elaborada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), presentada el 17 de noviembre de 2020.

Enfoque localista

A lo largo de todo el texto, las referencias a nuestra Norma Fundamental son constantes; sin cuestionar los principios constitucionales y valores superiores que inspiran nuestro Ordenamiento jurídico, creemos que se ha desaprovechado la ocasión para regular una Carta que, más allá de referenciar a una norma elaborada en una época pre digital en la que no se podían prever muchas de las circunstancias actuales, se abandonase el enfoque localista que preside a todo el documento y se ahondase en la regulación de los nuevos bienes jurídicos dignos de protección, nacidos a raíz de la revolución digital, y todo ello se hiciera teniendo en



cuenta y referenciando no sólo la normativa nacional, sino la legislación tanto a nivel internacional como, fundamentalmente, a nivel europeo.¹

Por tanto, la Carta debería resaltar el carácter universal de los derechos de libertad, de igualdad, y de participación en el entorno digital, diseñando un conjunto de principios y usos para el conjunto de la ciudadanía del mundo, que ya vive en una realidad de interconexión global, que debería hacernos rehuir de localismos y de regulaciones propias de una región o territorio.

Mera recopilación de intenciones y de circunstancias ya contempladas por las normas

La propuesta de Carta de derechos digitales expone que el texto tiene su base en los “*notables avances ya realizados en España para el reconocimiento de los derechos digitales, entre los que cabe destacar el Título X de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el recientemente aprobado Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia*”. De hecho, la intención primitiva de la Carta, al menos hasta lo que la UGT conoce, era la de completar y desarrollar el propio marco normativo al que acabamos de hacer alusión, es decir, incluir aquellos derechos no reconocidos en el citado Título X, como pudieran ser la protección de los colectivos vulnerables, como son los menores o las personas con discapacidad en el entorno digital. Y desde nuestro papel de agentes sociales, no podemos dejar de preguntarnos cómo va a ser posible que, si la Carta no tiene carácter normativo, y por tanto no es de cumplimiento preceptivo ni puede vincular a los sujetos y operadores del ámbito privado, se pueda cumplir con ese objetivo primigenio de culminar el proceso de reconocimiento y garantía de los derechos digitales de la ciudadanía. Quizá, y sin querer desmerecer la loable intención de concretar los derechos “más relevantes en el entorno y los espacios digitales”, creemos que hubiese sido jurídicamente más eficaz, incluir aquellos derechos, que la propia propuesta denomina instrumentales o auxiliares de los derechos fundamentales (generados por los nuevos entornos, como la inteligencia artificial), en las normas en las que los mismos hubieran de subsumirse, a saber, la LO 3/2018, el RDL 28/20, la LO 1/1982, LO 2/1984, L 34/2002, o cualquier otra que, en función de la materia objeto de su alcance, debiera actualizarse atendiendo al proceso naturalmente dinámico del entorno digital.

¹ Estaríamos hablando desde la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, hasta, por ejemplo, el nuevo proyecto de legislación digital que la Comisión Europea presentó en diciembre de 2020, a través de la nueva Regulación del Mercado Digital (Digital Market Act), y de La Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act).



En definitiva, existe una continua reminiscencia a un marco normativo que, en muchos casos está obsoleto. La reiteración constante a lo largo de la Carta al marco legal existente, impide el objetivo fundamental de adaptar la regulación al nuevo contexto digital.

Instrumento no necesario que genera confusión

Como acabamos de mencionar, la propia propuesta reconoce que la Carta no tiene carácter normativo ni vinculante. Sin embargo, toda su estructura o apariencia formal lo es idéntica a la que tendría cualquier norma: una exposición de motivos, y una división por títulos o capítulos, con la salvedad de que no se mencionan artículos (si ordinales numerados).

Esa apariencia formal de ley, creemos que es negativa, porque, además, genera confusión sobre los derechos ya existentes que, en algunos de los casos, han sido literalmente transcritos de las normas, como es el caso de la remisión a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Junto a ello, el borrador de la carta incluye la regulación de nuevos derechos no contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, a veces si tratados y definidos por nuestra Jurisprudencia, pero no regulados en una norma, como pudiera ser el derecho a la identidad digital. Reiteramos que es necesario que, estos nuevos derechos, se tipifiquen en las normas en las que deban subsumirse, porque lo contrario supondrá simplemente la ineffectividad o inejecutabilidad del derecho.

Si lo que realmente se pretende es regular los derechos fundamentales en el entorno digital, el procedimiento a seguir debería haber consistido en redactar una ley orgánica o bien proponer una reforma constitucional, para adaptar su contenido a la nueva era digital. Y en relación a este aspecto, nos parece crucial mencionar y reconocer la pionera regulación que la carta efectúa sobre los derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías, esfuerzo que resultará baladí, si no se terminan de tipificar las garantías de cómo tratar el acceso a la información cerebral y su posible alteración, en una norma que probablemente debiera revestir el carácter de orgánica.

Por todo lo expuesto, la idoneidad y la utilidad del presente documento, pueden quedar en entre dicho.

Tratamiento desigual en los derechos reconocidos

Así encontramos que mientras algunos de los derechos de enorme relevancia reconocidos en la Carta, como pueden ser los derechos a la protección de datos, a la identidad digital, o a la seguridad digital tienen una escueta y parca definición y regulación en el texto, otros como los derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones públicas o los derechos de libertad de expresión y libertad de información por el contrario, reciben un extenso tratamiento en comparación a la extensión del resto.



Indefinición de los derechos regulados

Si la Carta tiene como uno de sus objetivos primordiales ser la referencia o Guía de los derechos digitales, y teniendo en cuenta que los derechos tratados en el documento además de afectar a las corporaciones o los poderes públicos, afectan fundamentalmente al conjunto de la ciudadanía, creemos necesario que los diferentes títulos dedicados a los 25 derechos contemplados en el documento, comiencen su regulación con la definición de los mismos, sobre todo en aquellos derechos de carácter eminentemente complejo ya sea desde un punto de vista técnico, como jurídico, sirvan de ejemplo los derechos de identidad, pseudonimato o herencia en el entorno digital.

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁMBITO LABORAL

Consideramos oportuno dividir en dos partes el análisis del capítulo relativo a los derechos del entorno laboral y empresarial. Así, analizaremos, en un primer lugar, los apartados 1 y 2, para a continuación formular comentarios más extensos en torno a los puntos 3 y 4.

Derechos en el ámbito laboral. Apartados 1 y 2

Al respecto de los dos primeros puntos del susodicho Capítulo XVII (desconexión digital, protección de la intimidad, teletrabajo), la Carta no hace más que ahondar en disposiciones jurídicas ya consolidadas en nuestro acervo legislativo, cuestión ésta que ya hemos abordado en nuestras consideraciones generales, y que abordaremos también en alguna de las consideraciones específicas, y que en cualquier caso la Carta ya advierte en sus consideraciones previas²³.

No obstante, como ya hemos mencionado, debemos tener en cuenta que la carta no tiene carácter normativo ni vinculante, pero sin embargo su apariencia formal es la propia de una Ley, lo que puede generar confusión en los trabajadores sobre los derechos ya existentes, que en el caso que nos une, han sido literalmente transcritos de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. La mera reseña generalista sin más podría

² En este sentido, por ejemplo, no parece tenerse en cuenta ni referenciarse, por ejemplo, el nuevo proyecto de legislación digital que la Comisión Europea presentó en diciembre de 2020, a través de la nueva Regulación del Mercado Digital (Digital Market Act) y de La Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act).

³ “Así, la Carta de derechos digitales que se presenta no trata de descubrir nuevos derechos fundamentales sino de concretar los más relevantes en el entorno y los espacios digitales o describir derechos instrumentales o auxiliares de los primeros”. Introducción a la Carta de Derechos Digitales, SEDIA. https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/participacion_publica/audiencia/ficheros/SEDIAIntroduccionCartaDerechosDigitales.pdf.



llevar al lector a confusión sobre su alcance y contenido, cuando se trata de derechos ya desarrollados en la legislación, por lo que proponemos como alternativa para evitarlo, *hipervincular* digitalmente al BOE- las referencias a estos derechos con los artículos aplicables de cada una de las leyes vigentes en cada momento.

Junto a ello, entre los derechos existentes en el ámbito laboral, que afectan de una manera específica a los trabajadores en sus relaciones con la parte empresarial, creemos que debería considerarse que, junto a los derechos de desconexión, intimidad en el uso de los dispositivos digitales, de videovigilancia y grabación de sonidos y sistemas de geolocalización, se incluya en la redacción final de este apartado, el derecho a la protección de datos.

Igualmente, echamos en falta que, como en otros apartados como pueda ser por ejemplo en el apartado relativo a los derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones Públicas, en el que específicamente se contempla la posibilidad del derecho a la indemnización por toda lesión que las personas físicas o jurídicas sufran en sus bienes o derechos, no se mencione en este artículo de manera expresa, las posibles responsabilidades disciplinarias por infracción de estos derechos en el entorno digital, tanto de la parte empresarial como por los empleados.

Por último, y tal y como explicaremos en el apartado “III.-Otras consideraciones”, en las enmiendas realizadas al derecho a la libertad de expresión e información, si finalmente se decide que la Carta contemple en cada apartado los aspectos procedimentales de cómo garantizar los derechos aludidos en cada momento, deberán exponerse en este apartado cómo deben los intervinientes garantizar procedimentalmente estos derechos. A modo de ejemplo, para proteger los datos personales en situaciones de movilidad y teletrabajo, el responsable del tratamiento debe: definir una política de protección de la información para situaciones de movilidad, elegir soluciones y prestadores de servicio confiables y con garantías, restringir el acceso a la información, configurar periódicamente los equipos y dispositivos utilizados en las situaciones de movilidad, monitorizar los accesos realizados a la red corporativa desde el exterior y gestionar racionalmente la protección de datos y la seguridad.⁴

Derechos en el ámbito laboral. Apartado 3

a) Deberá proporcionarse a las personas trabajadoras una formación adecuada

En el punto 3, referenciado a la Transformación Digital (formación e información a la RLT), consideramos que debe ampliarse sustancialmente, hasta conformarlos como derechos a la altura de los inscritos en los puntos 1 y 2. La formación relacionada con el proceso de transformación digital no puede ni debe resolverse con una simple fórmula declarativa. No

⁴ Conforme a las orientaciones dadas en las Recomendaciones para proteger los datos personales en situaciones de movilidad y teletrabajo realizadas por la Agencia de Protección de Datos.



podemos obviar que, en España, 12,6 millones de personas trabajadoras no se forman en competencias digitales y un 80% de las compañías no dan formación digital a sus empleados. Sin formación en TIC a las personas trabajadoras, no habrá transformación digital posible.

Por tanto, estamos ante un aspecto crucial, determinante y fundamental tanto para el despegue económico de nuestro tejido productivo como para dotar de empleabilidad presente y futura a nuestra fuerza de trabajo. Una declaración de intenciones tal como *“Deberá proporcionarse a las personas trabajadoras una formación adecuada que permita su adaptación a las nuevas condiciones laborales”*, aunque bienintencionada, debe ser necesariamente complementada con leyes, compromisos y financiación que la conviertan un hecho palpable. Con este objetivo, UGT lleva tiempo reclamando un Derecho a la Formación continua profesional, con una reserva legal de horas articulada en la Negociación Colectiva; un Derecho que debería comenzar a debatirse, construirse y consensuarse dentro de los vehículos establecidos a tal efecto en el diálogo social bipartito y tripartito. No ligar el desarrollo de tal Derecho – u otras iniciativas similares, como el anunciado Plan Nacional de Competencias Digitales, del que poco más que su nombre se sabe- a su referencia en esta Carta no tendría sentido práctico ni real.

b) Se informará a la representación de los trabajadores sobre los cambios tecnológicos que vayan a producirse en la empresa y a participar en la toma de decisiones sobre la transformación digital y las consecuencias laborales que la misma pudiera implicar.

En primer lugar, creemos que existe un error en la redacción del apartado 3.b, ¿qué significa que se informará a la RLT sobre los cambios tecnológicos ...y a participar? Suponemos que falta un verbo, y que lo que se pretende es decir que se les reconoce el derecho a participar en la toma de decisiones sobre la transformación digital y las consecuencias laborales que la misma pudiera implicar.

Junto a ello, y al igual que hemos expuesto en los apartados 1 y 2, los derechos que se reconocen en este ordinal, son una referencia cruzada a los artículos del Estatuto de los Trabajadores aplicables (artículos 64 y 41, entre otros). La Carta es una guía orientadora, que carece de efecto vinculante, lo que podría dar lugar a la impresión errónea por parte de los ciudadanos de encontrarnos ante una declaración de intenciones sin fondo jurídico, cuando la realidad es muy diferente. De hecho, y sin perjuicio de la redacción incorrecta de este apartado, debemos recordar que, son materias de un simultáneo derecho de información y consulta, la situación y estructura del empleo en la empresa o centro de trabajo, las decisiones de la empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la organización del trabajo y a los contratos de trabajo en la empresa y la adopción de eventuales medidas preventivas, especialmente en caso de riesgo para el empleo.



Derechos en el ámbito laboral. Apartado 4

El apartado 4 es, en nuestra opinión, el más novedoso, al reflejar, no sólo, un derecho vigente (artículo 22.1 del RGPD *et al* y artículo 87 y sucesivos de la LOPD-GDD; de nuevo sin mención cruzada), sino que profundiza en el contenido del “deber de información”, al reflejar tres de las secuencias implicadas en las decisiones algorítmicas (set de datos de entrenamiento, lógica aplicada y auditoría del proceso). Sin duda, se trata de un paso en la buena dirección para paliar la desprotección normativa que sufren las personas trabajadoras ante la algoritmia laboral, pero con las evidencias científicas que ya tenemos en nuestro poder, resulta claramente insuficiente.

Comenzaremos exponiendo que desde luego defendemos que, en aquellos supuestos en los que de manera motivada se opte por procesos de decisión automatizada, el derecho de los representantes de los trabajadores, no será sólo y exclusivamente el derecho de información.

UGT propone desarrollar un nuevo acervo legislativo que proteja a las personas trabajadoras ante el peligro demostrado que suponen las decisiones automatizadas. Los estudios científicos y académicos constatan, reiteradamente, que la aplicación de IA y algoritmos a los entornos de trabajo generan por decisiones injustas, desigualdad, comportamientos amorales y de dudosa ética, tratamientos ilegítimos e incluso taxativamente ilegales. La realidad desmiente el mito de la infalibilidad de los algoritmos aplicados al mundo del trabajo, y por ello, una Carta de Derechos Digitales no puede tratar de soslayo un aspecto tan transcendental.

Por ello, este Sindicato propone, de inicio, catalogar la IA y la algoritmia aplicada al mundo del trabajo como una actividad de alto riesgo. Se trata de una clasificación promovida por el propio Libro Blanco sobre IA de la Comisión Europea⁵, que afirma que el uso de aplicaciones de IA en “*situaciones que repercutan en los derechos de los trabajadores*” debe identificarse como de “*elevado riesgo en sí mismo*”, “*independientemente del sector de que se trate*”.

A partir de esta declaración, se deberán articular y consolidar garantías para el ejercicio de los derechos de los trabajadores en entornos automatizados, conformando derechos laborales efectivos y reales, con responsabilidades y compromisos análogos a los actuales derechos “analógicos”. No es el objetivo de este documento detallar todas las vertientes que deben analizarse, que dejamos para su procedente debate en las mesas de Diálogo Social, pero sí consideramos pertinente trasladar una relación tentativa de propuestas:

- Instaurar registros de algoritmos laborales en todas las empresas. De facto, la Unión General de Trabajadores ha exigido al Ministerio de Trabajo la necesidad de que se creen

⁵ COM(2020) 65 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2020%3A0065%3AFIN> y <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0065&from=EN>



registros de algoritmos, entre otros aspectos, para controlar las posibles actividades irregulares de las plataformas digitales.⁶

Sostenemos que el referido Registro debe ser consultable por las personas trabajadoras y su Representación legal, con la finalidad de poder comprobarse la existencia real de un “humano al final de la cadena de mando” y que se cumplen con los derechos y garantías establecidas por las leyes aplicables. A estos efectos, es relevante destacar la iniciativa paralela propuesta por la misma SEDIA, inscrita en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, de instaurar un *“registro de sistemas automatizados en la Administración Pública que documente los sistemas automatizados ya existentes y futuros”*⁷. Sin lugar a duda, los mismos argumentos que han llevado a la Secretaría de Estado a entender la conveniencia de este registro en las AAPP, con la finalidad de garantizar un tratamiento ético y legal del funcionamiento de los algoritmos, es plenamente aplicable a los entornos de trabajo.

- Garantizar la trazabilidad y auditoría de todos los algoritmos laborales. Dicha auditoría acreditará y certificará que las decisiones son independientes de cualquier sesgo en el set de datos de entrada, que están separadas de dichos datos de entrada en términos de proceso y suficiencia, y verificará que los resultados finales son competentes, veraces, justos, precisos, sin omisiones y que respetan los derechos y libertades de las personas trabajadoras. No debemos olvidar que estamos, al fin y al cabo, ante herramientas de trabajo, y, por tanto, deben estar sometidas al mismo grado de seguridad, inspección y trazabilidad que sus hermanas tangibles.
- Definir y precisar la responsabilidad legal de las decisiones resultantes de los algoritmos laborales, clarificando cuál de los actores implicados (empleador, proveedor del software, Mutua, seguros suscritos por la primera, etc.) es el responsable último a todos los efectos jurídicos.
- Declarar la supremacía de los derechos a la información y consulta de la Representación Legal por encima de otras leyes, como las de propiedad industrial o las de “secreto comercial” o “empresarial”, actualizado el artículo 1.3 de la Ley 1/2019, de Secretos

⁶ <https://www.elperiodico.com/es/economia/20201111/ccoo-y-ugt-plantean-un-registro-de-algoritmos-para-controlar-a-las-plataformas-8200734>

⁷ “Asimismo, se pondrá en marcha con el GobTechLab un registro de sistemas automatizados en la Administración Pública que documente los sistemas automatizados ya existentes y futuros. Una de las tareas llevadas a cabo será la evaluación ética y legal de dichos sistemas cuyo objetivo será reforzar la legitimidad y confianza en los sistemas automatizados de la Administración Pública. El marco ético debe considerar las especificidades en el caso del uso de la IA en la Administración Pública”. ENIA, <https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/ENIA2B.pdf>



Empresariales, con la finalidad de no obstaculizar el respeto del bien mayor que representa la protección de la dignidad humana y laboral.

Finalizado el examen del texto propuesto por la SEDIA, pasamos a compartir un aspecto que no figura en la carta – o lo hace de una forma tangencial- y que consideramos necesario incluir. En concreto, nos referimos a la cuestión de género y su relación con los Derechos Digitales.

Es un hecho constatado la amplia brecha de participación de las mujeres en los entornos informáticos, y por extensión, en el diseño, desarrollo e implementación de la IA y la algoritmia en todas y cada una de sus vertientes. Con una carencia de tal importancia presente y futura – corremos el riesgo de, si no logramos una participación paritaria en los procesos de transformación digital, retroceder años en igualdad de género. Un retroceso que no puede resolverse con aseveraciones genéricas y generalistas en pos de una “*perspectiva de género*” vacía de contenido.

Hablamos de derechos fundamentales y una lacra en este sentido requiere de un impulso decidido por conformar una auténtica y equilibrada representación de género entre las personas encargadas de programar y auditar algoritmos. Resulta imposible diseñar algoritmos inclusivos y con perspectiva de género si aquellos que confeccionan estas herramientas no representan a la sociedad en donde se aplicarán sus decisiones. En consecuencia, deben establecerse normas tasadas y con objetivos medibles de diversidad en los equipos que programan estas soluciones informáticas, favoreciendo la presencia de mujeres y colectivos minoritarios en los mismos, todo ello al objeto de hacer cumplir el equilibrio de género en nuestra sociedad.

La empresa en el entorno digital

En relación al párrafo primero, se determina que: *se reconoce la libertad de empresa en los entornos digitales en el marco de la economía de mercado. El desarrollo tecnológico y la transformación digital de las empresas deberán respetar los derechos digitales de las personas*, consideramos que sería apropiado añadir a la frase de las personas y en particular, de sus trabajadores.

Como hemos dicho en nuestros comentarios relativos al apartado 2 de los derechos en el ámbito laboral, se hace necesaria aquí a la referencia (igual que se hace en innumerables ocasiones a lo largo de toda la Carta, de la obligación) del obligado cumplimiento por la de la parte empresarial de la ley, así como del nacimiento de responsabilidades disciplinarias por infracción o incumplimiento de estos derechos.



III. OTRAS CONSIDERACIONES

Aunque la materia que constitucional y jurídicamente tenemos reconocida es la de representación y defensa de las personas trabajadoras y de interlocución socio-laboral ante el resto de agentes implicados, la Unión general de Trabajadores defiende los intereses del conjunto de los trabajadores en cualquiera de sus condiciones, trabajen o no, sean fijos o temporales, y lo hacemos con carácter integral y no a un colectivo concreto. Por ello, y aunque no sean derechos que exclusivamente afecten a la esfera de las relaciones laborales, sí que lo hacen al conjunto de la ciudadanía y por tanto al conjunto de las personas trabajadoras, por lo que hemos considerado pertinente poder formular las siguientes enmiendas que no gravitan en nuestra estricta esfera competencial.

Primera.-

En la **exposición de motivos** o introducción a la Carta de Derechos digitales, se aduce que la Carta está sujeta y se entiende sin perjuicio del ordenamiento jurídico vigente, en particular en materia de derechos, cuyas disposiciones serán de aplicación, incluyendo en particular lo establecido por las leyes:

- *Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.*
- *Ley orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.*
- *Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.*

Comentario: la mención exclusiva a estas tres leyes carece de sentido jurídico. Existen muchas más normas que guardan relación con los derechos contemplados en la Carta y a las que no se hace alusión alguna. Debería optarse por la supresión de estas referencias, o ampliar las mismas al conjunto de normas imbricadas en la materia.

Segunda.-

Derechos de libertad

2. Todas las personas poseen idénticos derechos en el entorno digital y en el analógico, sin perjuicio de las limitaciones que de acuerdo con la Constitución y las leyes pudieran establecerse atendiendo a las peculiaridades de cada ámbito.



Comentario: debería suprimirse de este párrafo la mención a posibles limitaciones, toda vez que rompe con el carácter universal que preside a este derecho. Es obvio que, de existir limitaciones, estas deberán regularse y motivarse en las leyes que sean de aplicación.

En este sentido baste mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo 96/2017, Sala Cuarta, de 2 de febrero: "En efecto, de conformidad con la doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) [SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5 ; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 e), y 37/1998, de 17 de febrero]".

Tercera.-

Derecho a la protección de datos

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación.

Comentario: como ya hemos comentado en nuestras consideraciones generales, el tratamiento que la Carta efectúa en relación a la protección de datos es absolutamente parca, de tal modo que, en este caso, ni tan siquiera se hace una transcripción de la norma existente como el texto efectúa en otros apartados, sino que, al contrario, prescinde en su enunciamiento, derechos de gran relevancia que no deberían ser omitidos. Nos referimos al resto de derechos ARCO, no sólo los contemplados de acceso y rectificación, sino los derechos de oposición, cancelación, portabilidad de los datos, derecho al olvido, y derecho a la supresión.

En relación al consentimiento, debería hacerse alusión en la redacción final de la Carta al necesario carácter expreso (acción afirmativa inequívoca) de dicho consentimiento (recordemos que tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, no se admite el consentimiento tácito).



Junto a ello, consideramos necesaria la alusión al resto de fundamentos legítimos que amparan el tratamiento de datos, porque lo contrario puede llevar a confusión, y recordemos que en el caso de los trabajadores, la base jurídica del tratamiento, no es el consentimiento (dadas las posibles consecuencias adversas para los mismos en caso de su negativa), sino que la base jurídica normalmente radica en que sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte (o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales), o para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

Así mismo se aduce que *los datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley.*

Comentario: en vez de mencionar que los datos deben de tratarse de modo leal (principio de lealtad), sería mucho más objetivable y comprensible que se mencionara el cumplimiento del resto de a aplicar en el tratamiento de datos, es decir, se aludiera a los principios de licitud, idoneidad, necesidad, proporcionalidad, minimización, limitación de la finalidad, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad, confidencialidad, transparencia y responsabilidad pro activa.

Por último, el ordinal 3 del presente título, determina que: el respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente.

Comentario: la redacción puede conducir a confusión, toda vez que pareciera que esa autoridad independiente aún no está creada, siendo que la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades Autonómicas existentes, están encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos y controlar su aplicación. De otro lado, no se mencionan a lo largo del texto otras autoridades u organismos que tengan como competencia, velar porque se lleven a término el resto de derechos proclamados en la Carta, luego no parece congruente ni en términos de información, ni en términos de técnica legislativa, que sólo se recoja en este apartado tal autoridad.

Cuarta.-

Derecho a la identidad en el entorno digital

Se determina en el presente título que:

- 1. Se reconoce el derecho a la propia identidad en el entorno digital, de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional y europeo.*
- 2. La identidad no podrá ser alterada, controlada o manipulada por terceros contra la voluntad de la persona.*



3. Se establecerán las garantías que permitan preservar y controlar la propia identidad en el entorno digital.

Comentario: en primer lugar, debemos comentar que, tal y como hemos expuesto en las consideraciones de carácter general que, si la Carta tiene como uno de sus objetivos primordiales ser la referencia o Guía de los derechos digitales, difícilmente puede llevarse a término si no se definen y concretan los mismos. En el caso que nos une, más aún si estamos hablando de un derecho de nueva regulación.

La identidad digital asociada a un individuo u organización, se construye de forma dinámica en el ciberespacio, y se cimenta tanto desde el prisma de la identidad objetiva, como desde el prisma derivado de la interpretación por terceros de nuestras informaciones y opiniones publicadas, así como de nuestras omisiones.

Encontramos que la regulación efectuada por la Carta, no contempla las dos dimensiones del derecho, por cuanto, aunque efectivamente salvaguarda y garantiza la no posibilidad de que la identidad sea manipulada, alterada o controlada, no alude a la necesaria gestión de la seguridad y privacidad de las informaciones que publicamos, y los sistemas y dispositivos que se utilicen para ello. Esta parte de obligación que tiene para el individuo el propio reconocimiento del derecho, puede ser incompatible con el derecho al pseudonimato regulado en la Carta.

Por último, cuando el párrafo se refiere al establecimiento de las garantías, no queda claro si se está refiriendo a la ejecución material del derecho, a través por ejemplo de la creación de una autoridad independiente que vele por el desarrollo del mismo, o se está refiriendo, como así creemos, al desarrollo legislativo de este nuevo derecho reconocido en la Carta, en cuyo caso, sería menos confuso que el ordinal 3 determinase que una Ley (a nuestro entender de carácter orgánico), establecerá las garantías aludidas.

Quinta.-

Derecho a no ser localizado y perfilado

1. El derecho a la libre autodeterminación individual y la garantía de las libertades comporta el derecho a no ser objeto de localización, ni a ser sometido a análisis de la personalidad o conducta que impliquen el perfilado de la persona.

2. Sólo serán posibles tales tratamientos de información personal con el consentimiento de la persona afectada o en los casos y con las garantías previstos en las leyes.

Comentario: el ordinal 2 de este apartado debería suprimirse. Su inclusión vacía de contenido la garantía reconocida en el ordinal que le precede. Es obvio que los supuestos previstos en las leyes ya están tipificados, luego aludir a su cumplimiento es de nuevo reiterativo e innecesario.



Sin embargo, debería incidirse de una manera mucho más profunda, que significa el consentimiento de la persona afectada. Un consentimiento que debe ser libre e informado. Y todo ello además para aquellos supuestos en donde la base jurídica sea el consentimiento, porque reiteramos que por ejemplo, en los supuestos de los sistemas de geolocalización para el control de los trabajadores, regulados en el art. 90 LOPDGDD, la base jurídica del tratamiento de datos no sería el consentimiento, sino la ejecución del contrato de trabajo, y ello sin perjuicio de la obligación empresarial de informar a los trabajadores y a sus representantes, de forma expresa, clara e inequívoca acerca de la existencia y características de estos dispositivos, así como de la necesaria evaluación de impacto antes de implementar tecnologías de este tipo.

Sexta.-

Derecho a la herencia digital

1.- Se reconoce el derecho a la herencia digital de todos los bienes y derechos de los que sea titular la persona fallecida en el entorno digital.

Comentario: la redacción conduce a error, pareciera que lo que se escribe es que la persona ha fallecido en el entorno digital.

Séptima.-

Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital

2. Los poderes públicos impulsarán políticas ordenadas a la garantía del acceso efectivo de todas las personas a los servicios y oportunidades que ofrecen los entornos digitales en cualquiera de sus dimensiones, garantizarán el derecho a la no exclusión digital y combatirán las brechas digitales en todas sus manifestaciones, atendiendo particularmente a la brecha territorial y asegurando un derecho de acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio a Internet para toda la población.

Comentario: sin desmerecer la necesidad de combatir la brecha territorial, no compartimos que ésta deba atenderse de forma particular. Es importantísimo tener claro que la brecha digital en nuestro país, tienen su origen y causa en las brechas digitales que se producen por cuestión de género, edad, de índole formativa, de índole funcional, de índole económica, de índole territorial, urbana-rural y formativa-laboral, todas ellas coexisten y no son excluyentes las unas de las otras, sin que pueda abocarse en un texto que nace con vocación de ser referente, a la primacía del combate de una de ellas frente al resto.



Octava.-

Protección de menores en el entorno digital

1. *Los progenitores, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos, de los entornos digitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales.*

Comentario: ciertamente, aunque podemos entender lo que persigue este enunciado, e incluso compartir los principios que subyacen al mismo, no compartimos la necesidad de incluir tal mandato en una Carta de derechos digitales.

En primer lugar, la redacción de este párrafo determina que se debe procurar que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable, y tal aseveración parece un mandato ético que invade el ámbito privado de la ciudadanía.

La patria potestad, debe ejercerse siempre en beneficio del interés superior del menor, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica, y comprende las obligaciones de velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes. Es por ello que una carta de este tipo, no puede mandar en términos de control a los sujetos intervinientes de la formación en la esfera privada del individuo, el uso equilibrado y responsable, términos que de otro lado pueden inducir a error por su carácter subjetivo.

5. *Se impulsará el estudio del impacto en el desarrollo de la personalidad de los menores derivado del acceso a entornos digitales, así como a contenidos nocivos o peligrosos. Dicho estudio prestará particular atención a sus efectos en la educación afectivo-sexual, las conductas dependientes, la igualdad de género, así como los comportamientos antidemocráticos, racistas y violentos.*

Comentario: si el objetivo del presente documento es servir de Guía de referencia orientadora en los derechos objeto de tratamiento, y para ello sólo se invocan y “casi enumeran” los derechos más relevantes en el entorno y los espacios digitales, no procede que se descienda a regular que se vaya a impulsar, por la autoridad competente un estudio de impacto en el desarrollo de la personalidad de los menores derivado del acceso a entornos digitales.

Novena.-

Protección de las personas mayores en el entorno digital

1. *Se reconoce el derecho de las personas mayores al acceso a los entornos digitales.*



2. Se garantizará la accesibilidad a los entornos digitales a las personas de este colectivo.

Comentario: no compartimos la necesidad de que se regule en un título independiente a las personas mayores en el entorno digital. No es un colectivo vulnerable “per se”, y dependerá de todas las circunstancias que envuelvan al individuo, el que sea necesario otorgarle una especial protección por tener una determinada edad que ni tan siquiera es concretada en el texto. Además de ello, todos los derechos que se han enunciado con anterioridad son de directa aplicación al conjunto de la ciudadanía (hombres, mujeres, mayores de edad, adultos, personas de la tercera edad....), y por tanto, nuestro criterio es que a las personas mayores le son de aplicación los derechos regulados ya en la carta, debiéndose explicar en el presente apartado, en caso de que se considere lo contrario, el porqué de dicha exclusión y de la necesidad de reconocerles de forma independiente el derecho al acceso en el entorno digital.

Hay que tener en cuenta, además, que la Carta ya regula en otros apartados la lucha contra la brecha digital, y la formación de las personas adultas con particular atención a los mayores.

Décima.-

Libertad de expresión y libertad de información

c) A solicitar del prestador la no aplicación de técnicas de análisis que permitan ofrecer información que afecte a las libertades ideológica, religiosa, de pensamiento o creencias.

Comentario: ¿Por qué solo se enumeran estas libertades? ¿Por qué por ejemplo no se contempla el derecho cuando la información afecte a la libertad sexual?

d) A posibilitar el ejercicio del derecho rectificación ya sea frente a medios de comunicación, ya sea ante aquellos usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.

Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original.

e) A solicitar motivadamente de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la publicación, causándole un perjuicio.



En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso hará referencia a la decisión posterior.

Comentario: ya hemos dicho en nuestras consideraciones generales que este artículo es uno de los que, en comparación con otros derechos regulados en la carta, presenta una extensión y un desarrollo bastante superior a otros derechos. No compartimos la necesidad de que la Carta entre a regular aspectos procedimentales de cómo deben actuar los medios de comunicación digitales para atender a las solicitudes de rectificación, y ello porque a lo largo del texto que se analiza en ningún momento se desarrollan otros aspectos procedimentales de gran relevancia, como por ejemplo los procedimientos o solicitudes de acceso, rectificación, oposición, cancelación, portabilidad de los datos, derecho al olvido, y derecho a la supresión. Por tanto, por congruencia o técnica legislativa, o se desarrollan en la Carta todos los procedimientos para ejercitar los derechos reconocidos, o no se desarrolla ninguno, siendo por tanto suficiente el reconocimiento del derecho incluido en el primer párrafo del apartado 2.d) del título.

Undécima.-

Derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones públicas

4. Siempre que sea posible se promoverá la universalidad y la neutralidad de las tecnologías usadas por las Administraciones públicas, así como su diseño y uso conforme a los principios éticos que acompañan a esta Carta. Así mismo se adoptarán las medidas precisas para garantizar que la prestación de los proveedores de servicios que colaboren con ellos por medios digitales se realicen conforme a las disposiciones de esta Carta.

Comentario: debe suprimirse la locución “siempre que sea posible”, porque vacía de contenido el reconocimiento y ejecución de los principios de universalidad y neutralidad.

Duodécima.-

Derecho de acceso a datos con fines de investigación científica, innovación y desarrollo

3. Cuando se trate de datos personales:

a) Los datos podrán ser tratados con fines de investigación científica, innovación y desarrollo previa anonimización.

Comentario: creemos necesario que, si se establece la posibilidad señalada de anonimización, al final del párrafo la siguiente locución: y siempre siguiendo los sistemas garantizados por las leyes o normas que lo desarrollen.



Decimotercera.-

Libertad de creación y derecho de acceso a la cultura, información y conocimiento en el entorno digital

1. Se reconoce el derecho a la libertad de creación en el entorno digital, promoviendo programas de formación en el sistema educativo y garantizando el derecho a la remuneración del personal creativo.

Comentario: no entendemos porque sólo se hace referencia al derecho de remuneración del personal creativo; ¿qué pasa con el resto de colectivos mencionados en la Carta, comunidad educativa, trabajadores...?

IV. CONSIDERACIÓN FINAL

Para concluir este documento, queremos aclarar un aspecto fundamental: UGT no propone ni pretende renunciar a un progreso tecnológico como el derivado de la transformación digital. Al contrario, debemos aprovecharlo al máximo. La sostenibilidad económica y la competitividad de nuestro tejido productivo depende de ello. La empleabilidad de millones de puestos de trabajo depende de una transición digital sincronizada con las necesidades futuras de los mercados de trabajo. Somos plenamente conscientes de ello. Pero también todos debemos ser igualmente conscientes, y consecuentes, de que esta transformación debe equilibrarse con férreos contrapesos sociales. Estamos seguros de que el objetivo compartido de todos es construir un futuro mejor para el conjunto de las personas trabajadoras y la Ciudadanía; y eso pasa por transponer y mejorar las actuales garantías y derechos a la nueva realidad tecnológica que está desarrollando.